

C.A. de Temuco

Temuco, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

En causa RIT T-171-2018, RUC 1840123802-2 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, el Juez Christian Osses Cares, con fecha 2 de enero de 2019 dictó sentencia en la cual decidió no dar lugar a la denuncia de tutela de derechos fundamentales con ocasión del término de funciones, interpuesta por Jacqueline Gloria Burdiles Espinoza en contra de la Junta Nacional De Jardines Infantiles, declaró la existencia de relación laboral de subordinación y dependencia de las partes a contar del 1 de septiembre de 2014 y hasta el 13 de junio de 2018, dio lugar a la demanda subsidiaria, declaró que el despido de fecha 13 de junio de 2018 es injustificado y en consecuencia condenó al demandado al pago de las siguientes sumas:

1.- \$2.480.940 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

2.- \$9.923.760 por concepto de indemnización por 4 años de servicios.

3.- \$4.961.880 por concepto de incremento de la indemnización por años de servicios que establece la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo.

4.- Cotizaciones de seguridad social del período señalado.

Rechazó en todo lo demás la demanda, sin costas.

Contra el referido fallo, ambas partes deducen recursos de nulidad fundados, según se expresará a continuación.

Y considerando:

En cuanto al recurso de nulidad deducido por la demandante.

Primero: Que, la parte demandante, representada por su abogado Francisco Riquelme Merino, dedujo recurso de nulidad fundado en la causal prevista en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo y solicita en definitiva, se acoja el recurso deducido, se



anule la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo en la que se condene a la denunciada por discriminación por opinión política en contra del actor, al pago de las indemnizaciones y reparaciones correspondientes, conforme lo dispone el artículo 489 del Código del Trabajo y por último que se condena a la demandada en costas de la instancia y del recurso.

Para fundar su recurso esgrime los siguientes argumentos:

Afirma que en la sentencia impugnada se infringieron las reglas de la lógica al analizar la prueba rendida. Estima que no sólo existieron indicios suficientes de la discriminación por opinión política denunciada, sino que la denunciada, a través de su absolvente, no pudo explicar los fundamentos del término de contrato. Luego, analiza la prueba testimonial rendida por su parte y documental que daría por acreditado este supuesto.

Posteriormente, transcribe lo razonado por el sentenciador en el considerando décimo de su sentencia.

Argumenta que siguiendo las reglas de la lógica, como lo es la coherencia y derivación, el juez debió dar por acreditado y cuenta de los indicios suficientes de la discriminación por opinión política. En este punto analiza la prueba que estima da por probado este hecho.

Concluye que una vez analizada la prueba y al no existir explicaciones la denunciada para el término de contrato de la denunciante, debió acoger la denuncia por discriminación por opinión política, debiendo ajustarse al procedimiento indiciario contenido en el artículo 493 del Código del Trabajo y las reglas de la sana crítica.

Hace hincapié en las reglas de la lógica, regla de la coherencia para así sostener que en el presente caso, si la administración pretendió justificar la desvinculación en una supuesta reestructura, lo que sería falso, debe entonces determinarse cuál es el verdadero hecho que motivó la separación y asegura que ese hecho está indiciariamente ilustrado tanto por las testigos como por la buena calificación y continuidad de los servicios o trabajos que desempeñaba la actora.



Luego en relación al principio de la no contradicción, asevera que en el caso concreto los testigos acreditan la afiliación, militancia, adhesión y preferencia política de la denunciante lo que se contradice con la conclusión de que no se acreditó fehacientemente que la actora es militante del Partido Demócrata Cristiano.

En relación al principio del tercero excluido, sostiene que el término de contrato fue por discriminación Política.

Afirma a su vez, en relación al principio de la derivación que el juez, sin tomar en consideración los testimonios de las testigos pretende exigir se acredite la militancia política de la actora mediante certificado o documento y en base a ello, afirmar que no se acreditó el factor de discriminación. Explica que si el despido fue declarado como injustificado, si no se acreditaron sus supuestos ni una causa legal, pero por otro lado todo debe tener una causa y existe prueba que acredite sus asertos, en definitiva la verdadera causal de despido fue discriminación por opinión política. Lo contrario es admitir que el despido es porque sí.

Concluye que si el sentenciador hubiera aplicado correctamente las reglas de la sana crítica, particularmente las reglas de la lógica antes señaladas, a través del procedimiento indiciario contenido en el artículo 493 del Código del Trabajo, no habría concluido en una sentencia que rechaza una discriminación por opinión política con indicios suficientes sino que se habría condenado a la demandada por la discriminación por opinión política de la actora.

En cuanto al recurso de nulidad deducido por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la demandada.

Segundo: Por su parte, la demandada a través del Consejo de Defensa del Estado y su procurador fiscal Óscar Exss Krugmann deduce recurso de nulidad fundado en las causales de las letras a), b) y c) del artículo 478 y la del artículo 477, todas del Código del Trabajo, causales que interpone una en subsidio de la otra y solicita en definitiva que se acoja su recurso y que en base a la primera causal invocada se



anule la sentencia recurrida y todo lo obrado en juicio, o bien, en base a las causales subsidiarias de las letras b) y c) del artículo 478 del Código del Trabajo, se anule el fallo recurrido y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes o, en base a la causal subsidiaria del artículo 477 del Código del Trabajo, se dicte sentencia de reemplazo solo en aquella en la que condena al pago de prestaciones sociales.

Así las cosas, y **en cuanto a la primera causal deducida**, esto es, la contemplada en la letra a) del artículo 478 del Código del Trabajo, sostiene que no le cabe duda alguna que atendidos los antecedentes aportados al proceso por ambas partes, resultaba manifiesto que este Tribunal era incompetente para conocer este pleito, por la sola aplicación del artículo 420, letra a), del Código del Trabajo.

Afirma que en concreto, la contratación de la demandante se ciñó expresa y taxativamente a las prescripciones del artículo 15 de la Ley de Bases de la Administración del Estado, que transcribe.

Agrega además que conforme a lo anterior, el artículo 10 del Estatuto Administrativo, Ley N° 18.834, dispone que: Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo", con lo que excluye la aplicación del Código del Trabajo a esta relación.

Concluye que la vinculación de una persona con el Estado o sus órganos y servicios, en base a honorarios, como ocurre en el caso en estudio, se encuentra expresamente regulada por el Estatuto Administrativo, que en su antiguo artículo 10 -actual artículo 11-.

Luego además, asevera que por tratarse de contratos a honorarios, fundados en el actual artículo 11 de dicho Estatuto, éstos se rigen, en primer lugar, por las disposiciones del convenio y, supletoriamente, por las normas del Código Civil, particularmente, las



normas sobre arriendo de servicios inmateriales, contenidas en el Párrafo 9 del Título XXVI del Libro IV.

Asevera que el régimen jurídico especial aplicable a la relación que mantuvo la actora con la Junta Nacional De Jardines Infantiles, y establecido en las normas reseñadas, se encuentra, por lo demás, en armonía con la normativa contenida en el Código del Trabajo, que indica al efecto en su artículo 12, inciso 2°.

Le resulta evidente que este Tribunal no era competente para conocer del presente asunto, puesto que a las personas contratadas a honorarios no es posible aplicarles las normas del Código del Trabajo cuyas disposiciones se contraponen absolutamente al régimen contenido en el contrato a honorarios y en el Código Civil, al cual debe remitirse la regulación del contrato por expreso reenvío del Estatuto Administrativo.

Agrega que teniendo en consideración que el demandado es la Subsecretaría de Educación (sic), el Juez de la instancia debió tener en cuenta que éste se rige por las normas y principios del derecho público, y en particular por el denominado "Principio de Legalidad" que rige los actos de la Administración Pública, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República en relación -en este caso concreto- con el artículo 11 del Estatuto Administrativo y demás normas de derecho público aplicables-, debiendo, entonces, considerar que por expresa disposición de dicha norma "las personas contratadas a honorarios se rigen por las reglas que establezca el respectivo contrato...", lo que impedía bajo todo respecto normar dicha relación por las disposiciones del Código Laboral.

Concluye que era indudable que el Tribunal A Quo carecía de competencia para conocer esta demanda ejercitada por un servidor a honorarios en contra de la Administración y al hacerlo ha quebrantado las reglas de competencia. Cita Jurisprudencia a su favor.

Termina este capítulo señalando que si se hubieran aplicado correctamente el artículo 420 del Código del Trabajo en relación con



el artículo 1º de ese Código y los artículos 10º y 11 del Estatuto Administrativo en relación con el Art. 15 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Tribunal se hubiera declarado incompetente para conocer de esta causa, toda vez que los Juzgados Laborales no tienen competencia para conocer de demandas basadas en contratos a honorarios, puesto que las relaciones entre el Estado y el personal a honorarios se rigen,- por así disponerlo el Estatuto Administrativo - por las normas del propio convenio, y en forma subsidiaria por las normas del Código Civil, excluyendo consecuentemente la aplicación del Código del Trabajo.

En cuanto a la **segunda causal**, deducida en forma subsidiaria, esto es, la de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo refiere que en el considerando noveno el sentenciador concluye que se habría acreditado la existencia de una relación laboral, entre el 1 de septiembre de 2014 hasta el 13 de junio de 2018 y para ello se estableció que no se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, por no tratarse de labores accidentales o un cometido específico.

Asevera que esta afirmación, en cuanto a que no existía un cometido específico — por lo que se descarta la aplicación del artículo 11 del Estatuto Administrativo y se da por configurada una relación laboral- carece de sustento, de la indispensable motivación.

Agrega que no existe en la sentencia una motivación que permita sostener que estas funciones que desempeñaba la demandante, una profesional, no eran específicas, sino que genéricas, lo que carece de sustento, toda vez que las funciones las ejecutaba en el marco de un programa determinado. Más aún, se trata de un programa presidencial. Y las funciones que desempeñaba como Coordinadora Regional son evidentemente específicas, y desempeñadas exclusivamente para el mencionado programa Presidencial.

Sostiene que bastaba con analizar los contratos de prestación de servicios a honorarios en los que se detallan las labores que debía



realizar la demandante en relación exclusiva a este programa, así como la declaración de la testigo de la propia demandante, doña Nubia Lopez Torres, quien prestaba servicios como Coordinadora del mismo programa en la Región de los Ríos, lo que es ratificado por el testigo de suparte, don Rodolfo González Fabres.

Asevera que esta falta de motivación permitió luego sostener que por el hecho de existir características similares a la de un contrato de trabajo como cumplimiento de horario, sujeción a instrucciones, etcétera, se estaba ante una relación laboral, lo que es absolutamente erróneo, ya que dichas características en ningún caso se oponen a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, en cuanto la facultad para contratar a honorarios. Tampoco sirve como fundamento para descartar la aplicación del artículo 11 del Estatuto Administrativo el hecho que los servicios prestados no se hubieran acotado a un plazo de inicio y término.

Luego reitera la idea de que los servicios prestados por la demandante eran específicos y que no tenían el carácter de laboral.

En su opinión, la conclusión anterior adolece de falta de fundamentación y contraviene el principio de la razón suficiente, el que luego explica en qué consiste para la doctrina.

Concluye que por esta razón se violó el artículo 11 del estatuto Administrativo, ya que no fue aplicado debiendo aplicarse, ya que la relación existente entre la demandante y la demandada estaba regulada por dicho precepto legal.

Señala que de no haber incurrido en la causal de nulidad invocada, el sentenciador necesariamente habría debido establecer como hecho de la causa que la parte demandante desempeñó funciones específicas y no genéricas, en su calidad de profesional —educadora de párvulos- en un programa Presidencial determinado, para la Junta Nacional De Jardines Infantiles, por lo que no procedía acoger, como se hizo, la demanda por despido injustificado, ya que los servicios se



enmarcan en lo contemplado por el artículo 11 del estatuto Administrativo.

En cuanto a la **tercera causal**, deducida en subsidio de las anteriores, esto es, la de la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, señala que se dejó asentado en la sentencia que el actor prestó servicios para la Junta Nacional De Jardines Infantiles en virtud de contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos con él, desde el año 2014, con obligación de asistencia, control fiscalización, cumplimiento de jornada y con sujeción a órdenes.

Refiere que es sobre la base de estos hechos que la sentenciadora concluyó erradamente que existió una relación laboral entre las partes, ya que, tal como como se explicará, los hechos referidos en caso alguno permiten establecer la existencia de una relación laboral, dado que dichos hechos — que no exista solución de continuidad entre los distintos contratos a honorarios a suma alzada, que exista registro de horario, firma de reloj control, con jefaturas, obligación de reportarse, cumplimiento de labores administrativas, acceso a vacaciones y licencias médicas- no excluyen de modo alguno al contrato de honorarios, ni transforman la relación contractual a honorarios en una de índole laboral.

Refiere que la circunstancia de que la parte demandante recibiera periódicamente sumas fijas por concepto de honorarios, se hallara sujeto a supervisión y estuviera obligada a seguir las instrucciones de autoridades de la Junta Nacional De Jardines Infantiles en la prestación de sus servicios, no conforma una relación de orden laboral regida por el Código del Trabajo, pues todas esas modalidades pueden estipularse en un contrato a honorarios, merced a la amplia autorización que concede en la materia el inciso final del artículo 11 de la Ley N° 18.834 y porque, en defecto de las estipulaciones del contrato, esas actividades deben entenderse regidas por las normas relativas al arrendamiento de servicios que contempla el derecho común.



Afirma que según se estableció en el juicio, la parte demandante, prestó los servicios especificados en los convenios a honorarios como en un programa determinado, por lo que la parte demandante estaba sujeta a un estatuto jurídico diferente del propio de un contrato de trabajo y que no es otro que las normas propias que establece el propio contrato a honorarios.

Concluye que no estamos ante una relación laboral y los contratos a honorarios ya referidos se rigen por las normas y resoluciones del contrato de prestación de servicios a honorarios.

En su opinión las funciones desempeñadas no sobrepasaron los límites contemplados en el referido artículo 11 del Estatuto Administrativo y los servicios prestados no constituyen una relación laboral, por estar autorizados expresamente en el Estatuto Administrativo, siendo inaplicables los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo.

Transcribe al efecto los artículos 11 de la Ley N° 18.834, 12 del estatuto administrativo y 12 del Código Laboral, para concluir que tratándose los servicios prestados de acuerdo con un contrato a honorarios pactado con la demandada, ellos no pueden regirse por el Código del Trabajo, desde que el vínculo contractual se rige por las reglas que establezca el respectivo contrato de honorarios en conformidad a lo dispuesto en el actual artículo 11 del Estatuto Administrativo, siendo inaplicables la normas del Código del Trabajo.

Alega además que de esta forma se infringieron los artículos 6 y 7 del Código del Trabajo por calificar como contrato de trabajo uno que no tiene tal calidad, así como los artículos 162, 163 y 168 b) del mismo Código, desde que se condenó a su representada a pagar una indemnización por falta de aviso y por años de servicio aumentada en un 50%, ni cotizaciones previsionales.

Termina este episodio sosteniendo que de no haber incurrido en la causal de nulidad invocada, la sentenciadora necesariamente habría debido concluir que los hechos asentados configuran una serie de



contratos a honorarios regidos por sus propias estipulaciones, de acuerdo con lo que establece el Estatuto Administrativo, por lo que no procedía acoger, como se hizo, la demanda por despido injustificado.

Finalmente, en relación con la **cuarta causal invocada**, de forma subsidiaria a las anteriores, esto es, la prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, explica que la infracción de ley se produce al condenar a esta parte al pago de las cotizaciones de seguridad social señaladas en la sentencia de la instancia.

Señala que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en razón del principio de legalidad le es imposible contratar bajo la normativa contemplada en el Código del Trabajo. Del mismo modo este principio impide el pago de prestaciones que no se encuentren autorizadas por ley.

Señala que la vinculación entre las partes únicamente pudo ocurrir en razón de los diversos contratos de prestación de servicios a honorarios a suma alzada suscritos entre la demandante y la administración, lo que resulta posible en razón de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 18.834, el que constituye un estatuto especial que goza de presunción de legalidad.

Concluye que atendida la naturaleza civil de aquéllos contratos, el demandado carece de título para pagar las cotizaciones de seguridad social.

Refiere que solo existiría la obligación del pago de cotizaciones de seguridad social desde la fecha en que ésta se encuentre ejecutoriada, pero jamás antes de esa data. Sostener lo contrario importaría no sólo contravención a la ley, sino que importaría además una sanción desproporcionada para la Junta Nacional De Jardines Infantiles, atendida la elevada cuantía que importan los reajustes, intereses y multas establecidas en la ley 17.322 que establece el procedimiento ejecutivo para el cobro de cotizaciones de seguridad social.

Denuncia la infracción de las siguientes normas:



1) Los artículos 6º, 7º y 100 de la Constitución Política de la República, artículo 2º de la ley 18.575 y artículo 2 de la ley N° 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativo.

2) Artículo 4 inciso 2º y artículo 9 inciso 3º del Decreto Ley N° 1263.

3) Artículo 58 del Código del Trabajo.

En cuanto al primer grupo de normas denunciadas, sostiene que durante el tiempo que la parte demandante sirvió en la Administración su relación se rigió por convenios a honorarios a suma alzada, por lo que no le asistía a la Junta Nacional De Jardines Infantiles, aparte de la retención y pago del impuesto respectivo, la obligación de retener y enterar cotización alguna de seguridad social y de salud en los organismos previsionales.

En lo relativo a este punto es importante tener presente lo señalado por la Contraloría General de la República en innumerables Dictámenes, según los cuales, los expertos contratados bajo base de honorarios, no invisten la calidad de funcionarios públicos y sus derechos y obligaciones son los establecidos en el respectivo contrato; no rigen a su respecto las disposiciones del Estatuto Administrativo ni las del Código del Trabajo, y por lo mismo, es resulta improcedente que el fisco haga pago de cotización de seguridad social alguna.

El pretender lo contrario, esto es, que a la Junta Nacional De Jardines Infantiles le correspondía el retener, declarar y pagar cotizaciones previsionales y de salud a las personas que se desempeñan bajo el vínculo a honorarios en la Administración del Estado, lleva aparejada una ilegalidad, violentando la supremacía Constitucional, contemplada en el artículo 6º y 7º de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 19.880. Dichas normas establecen que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella (para el caso concreto, el artículo 11 del Estatuto Administrativo y



demás normas de Derecho Público Administrativo aplicables) y deben desarrollar sus funciones dentro de su competencia.

Afirma que al disponerse que la parte demandada pague cotizaciones previsionales por un periodo en que no correspondía su entero por no existir relación laboral, y por ende, no había norma que habilitaría a realizar dicho desembolso, se contravienen no solo las normas que rigen la legalidad competencial sino que particularmente las normas sobre legalidad presupuestaria, contenidas el artículo 100 de la Constitución.

Concluye que al hacerlo se infringe lo señalado tanto el inciso 2° del artículo 4° y como en el inciso 3° del artículo 9°, ambos del Decreto Ley N° 1263 sobre Administración Financiera del Estado.

Refiere que no puede haber erogación o gasto público sin habilitación legal previa y que no se puede efectuar cualquier tipo de desembolso. Los únicos válidamente ejecutables son aquellos descritos en la tipología del clasificador presupuestario respectivo y que no se verifica respecto del pago de cotizaciones de seguridad social ni de salud para personas que laboran en la Administración bajo una prestación de servicios a honorarios, añade que esto también infringe la segunda norma indicada.

Además, agrega que la decisión de ordenar el pago de cotizaciones previsionales también infringe lo preceptuado por el artículo 58 del Código del Trabajo, ya que el demandado durante la vigencia de la relación convencional carecía de título para pagar cotizaciones.

Concluye además que solo por norma legal expresa un servicio público puede contratar personal al amparo del derecho laboral común, y si se realizara ello, sin la existencia de una ley previa, se incurre en un ilícito penal.

Alega que atendiendo a la circunstancia que la relación laboral entre las partes existe únicamente en razón de un fallo que así lo establece y por aplicación del principio de legalidad, resulta



improcedente la condena al pago de los gastos de régimen previsional mientras estuvo vigente el contrato de prestación de servicios a honorarios.

Termina este capítulo sosteniendo que una correcta aplicación del derecho en estos autos habría rechazado la pretensión de la parte demandante en cuanto al pago de cotizaciones de seguridad social.

Tercero: Que, el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, todo lo cual evidencia su carácter extraordinario que se manifiesta por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las referidas causales en atención al fin perseguido por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de aquellas que invoca, como asimismo, de las peticiones que efectúa.

I. En cuanto al recurso de nulidad invocado por el demandante

Cuarto: Que, el demandante alega la causal establecida en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, “Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”.

En relación a esta causal, se hace necesario señalar que sus reglas se encuentran contenidas en el artículo 456 del Código laboral, que preceptúa que el tribunal en su labor valorativa deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud les asigne valor o las desestime, debiendo en general tomar en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. Como es sabido, este



motivo anulatorio en ningún caso puede ser sede para debatir acerca del mérito de la prueba rendida en el juicio y su valoración, cuestión que es privativa del jurisdicente, en la medida que tal tarea se avenga con los parámetros de la sana crítica.

Quinto: Que, si bien el recurrente enumera una serie de problemas lógicos de los que adolecería el fallo, se desprende que lo verdaderamente cuestiona el recurrente no es la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, sino la convicción adquirida por el sentenciador que lo llevó a tener por no acreditada la denuncia de tutela de derechos fundamentales, criterio que naturalmente no comparte, pero que está lejos de constituir la causal de nulidad que se ha invocado.

Así, en la enumeración de problemas lógicos que realiza, se encarga de explicar pormenorizadamente la prueba tendiente a acreditar los hechos que sustentan su denuncia y no la razón de la deficiencia achacada ni explicar sus fundamentos.

Sexto: Que, según se observa lo que en realidad ha pretendido es que por la vía de este recurso se realice una ponderación de los medios de prueba de modo tal que se arribe a una conclusión diferente a la adoptada, lo que transformaría este recurso en una apelación, desviándolo a un territorio de conocimiento impropio para el mismo y contrario al carácter extraordinario y de derecho estricto con que el legislador lo ha establecido.

Séptimo: Que, esta deficiencia en la forma de interponer el recurso conduce necesariamente a su rechazo, según se dirá en la parte resolutive de este fallo.

II.- En cuanto al recurso deducido por la demandada:

Octavo: Que, por su parte, el demandado a través del Consejo de Defensa del Estado, interpone recurso de nulidad en base a 4 causales, una en subsidio de la otra, según se explicó, causales que en consecuencia, se analizarán en ese orden.

a. En cuanto a la primera causal deducida:



Noveno: Que, en un primer capítulo, el recurrente alega la causal regulada en la letra a) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es “Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente”.

Décimo: Que, al respecto cabe sostener que las normas de protección frente a vulneraciones de derechos fundamentales son de aplicación amplia a todos los funcionarios del servicio público, incluso cuando ellos no tenga la calidad de titulares o de contrata, pues estimar lo contrario sería discriminar entre diversas categorías de funcionario que, en todo caso, prestan servicios para el Estado.

Undécimo: Que, resulta nítido que al sustentarse las peticiones del actor en una relación que estimó de carácter laboral, que los tribunales que tienen competencia para conocer de esta materia son los Juzgados del Trabajo de conformidad con lo prevenido en el artículo 420 del código del ramo, que señala que: “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

Duodécimo: Que, de este modo el primer motivo de nulidad no puede prosperar por lo que será desestimado.

En cuanto a la segunda causal de nulidad:

Décimo tercero: Que, en el segundo capítulo de su recurso, alega la causal establecida en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, “Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”.

En este acápite es menester reiterar lo razonado en el considerando cuarto del presente fallo.



Décimo cuarto: Que, en ese entendido y tal como reiteradamente se ha exigido, para que el presente recurso pueda prosperar por esta causa, es necesario que el recurrente señale en forma explícita y detallada los principios lógicos jurídicos trasgredidos y cómo dichos principios producen una alteración en el razonamiento del sentenciador que lo llevan a una conclusión equivocada, ya que si la sana crítica permite y faculta al juez para valorar las pruebas, construyendo su convicción con sujeción a los principios lógicos de identidad, de contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente, el reproche sobre el incumplimiento de dichos principios y reglas en la apreciación de la prueba que formula quien recurre de nulidad debe ser expresado de manera fundada, explicando cuál de ellos fue inobservado y de qué forma lo fue, nada de lo cual cumple el libelo recurso, el cual se limita a sostener que la sentencia no se encuentra motivada de forma adecuada.

Décimo quinto: Que, el defecto procesal anotado resulta insalvable para esta Corte atendido el carácter de derecho estricto que reviste este mecanismo de impugnación, por lo que el recurso deberá ser rechazado en este capítulo.

En cuanto a la tercera causal invocada:

Décimo sexto: Que, en un tercer capítulo, el recurrente invoca la causal regulada en la letra c) del artículo 478 del Código Laboral, esto es, “cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

En este apartado, el recurrente estima errada la calificación jurídica de los hechos que se han tenido por probados.

Décimo séptimo: Que, es menester entonces, anotar los hechos que se tuvieron por probados, los cuales, son los siguientes, de acuerdo a lo indicado en el considerando sexto del fallo impugnado:

1.- Que la actora prestó servicios mediante sucesivos contratos o convenios a honorarios para Junta Nacional de Jardines Infantiles a contar del 5 de septiembre de 2014 y hasta el 11 de junio de 2018, y



que sus funciones fueron de Coordinadora Regional del Programa Presidencial Mas Salas Cunas y Jardines para Chile.

2.- Que por Resolución TRA N° 110839/2/2018 de fecha 10.01.2018 se aprobó el convenio a honorarios a suma alzada entre la actora y la Junji, con inicio de funciones a contar del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, o mientras sus servicios sean necesarios.

3.- Que por carta fechada 11.05.2018 la directora Regional Gina Morán Veloso, le comunica a la actora el cese de los servicios a honorarios en virtud de la cláusula sexta del convenio, a partir del 11 de junio de 2018.

4.- Que por Resolución Exenta RA N°110839/1597/2018 de fecha 13.06.2018 de la Directora Regional de JUNJI, se resolvió poner término anticipado al convenio a honorarios suscrito con la demandante.

Además, en el considerando octavo se tiene por acreditado, en síntesis, que la actora debía seguir órdenes e instrucciones de la Directora Regional de la Junji, del Coordinador Nacional del programa y de la Vicepresidencia de la institución, debía marcar asistencia diaria en un registro biométrico del mismo modo que los funcionarios de planta o a contrata de la institución, estaba sujeta al cumplimiento de horario de 08:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y hasta las 16:00 horas los días viernes, debía presentar informes mensuales de las actividades realizadas a objeto de percibir el honorario convenido, era supervisada a través de la directora regional, el coordinador nacional del programa y en último término de la vicepresidencia ejecutiva, los servicios se prestaban en las dependencias físicas de la JUNJI, ubicadas en calle Vicuña Mackenna 914 de Temuco, en un espacio propio, con materiales e instalaciones proporcionadas por el servicio, continuidad en la prestación de los servicios personales por casi 4 años, sin interrupciones en el tiempo y finalmente debido al cumplimiento de horarios y obligación de jornada



obligatoria que tenía, los servicios prestados lo fueron en forma exclusiva.

Décimo octavo: Que, el recurrente estima que estos hechos se encuadran con la contratación a honorarios que contempla el artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Cabe señalar que la referida norma dispone que se podrán contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución.

Décimo noveno: Que, tal como lo resuelve la sentencia impugnada, no parece que las funciones por las que fue contratado el demandante se encuadren dentro del ámbito de aplicación de la norma en comento, en primer lugar, por la extensión de éstas y, en segundo, por su naturaleza misma, las que no eran accidentales y eran habituales en la institución.

En este sentido, son completamente acertados los razonamientos expresados en los considerandos décimo octavo y noveno del fallo recurrido.

Vigésimo: Que, así las cosas, solo queda rechazar el recurso intentado por este capítulo.

En cuanto a la cuarta causal invocada:

Vigésimo primero: Que, finalmente el recurrente enarbola la causal esgrimida en el artículo 477 del Código Laboral, el cual concurre en tres situaciones, según la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de fecha dos de mayo de dos mil once, ha resuelto que: *“Al respecto, debe precisarse que, según las directrices fijadas por la doctrina y jurisprudencia, la presente causal de invalidación del juicio oral y de la sentencia, concurre únicamente en los siguientes casos: a) cuando existe una contravención formal del texto de la ley, es decir cuando el juzgador vulnera de manera palmaria y evidente, el texto legal; b) cuando se vulnera el verdadero sentido y alcance de una*



norma jurídica que sirvió de base y fundamento para la dictación de una sentencia; y c) cuando existe una falsa aplicación de la ley, situación que se verifica cuando el juzgador deja de aplicar una norma jurídica, cuando resulta realmente pertinente su aplicación” (sentencia recaída en la causa Rol 2095-2011, de fecha 2 de mayo de 2011, de la Excelentísima Corte Suprema).

En este estadio, el recurrente denuncia la infracción de las siguientes normas:

- 1) Los artículos 6 y 7° y 100 de la Constitución Política de la República y artículo 2° de la ley 18.575 y artículo 2 de la ley 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativo.
- 2) Artículo 4 inciso 2° y artículo 9 inciso 3° del D.L N° 1263.
- 3) Artículo 58 del Código del Trabajo.

En definitiva lo que reprocha es la imposición del pago de cotizaciones laborales al trabajador demandante por todo el periodo trabajado.

Vigésimo segundo: Que, al respecto, el recurrente comienza su argumentación desde dos premisas que son erradas: que la relación contractual que unió a las partes era civil y que se encontraba al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo; al contrario, el sentenciador determinó que esta relación no se encuadraba en lo prevenido en dicho artículo y que la relación tenía un carácter laboral, cuestiones que no son discutidas en lo que respecta a esta causal. Bajo este prisma, entonces, era responsabilidad del Fisco, como empleador, retener los fondos para el pago de las cotizaciones previsionales del trabajador.

Por lo demás, las normas que estima infringidas regulan las formalidades que el órgano central debe cumplir para efectos de hacer desembolsos patrimoniales. Estas normas de organización interna no pueden interpretadas de forma tal que priven a un trabajador de las cotizaciones previsionales a las que tiene derecho, dejándole en desmedro de los demás trabajadores.



Vigésimo tercero: Que, por otra parte, al tener la sentencia el carácter de declarativa, lo que hace es reconocer una situación de derecho que existía desde que ella la fija, es decir, reconoce la relación laboral desde la fecha en que el demandante empezó a trabajar, por lo que si no se cumplieron a su respecto todas las obligaciones del empleador, entre ella pagar las cotizaciones previsionales y de salud, éstas tal como lo sostiene el fallo, se adeudan.

Para así decidirlo, debe considerarse que en el ámbito del derecho las cosas son lo que la ley dice que son y no lo que las partes o alguna de ellas expresa ser. La labor del juez, que se plasma en la sentencia, es establecer esta realidad legal y jurídica, en razón de como los supuesto fácticos la configuran. Desde esa perspectiva, establecidos y ponderados estos supuestos, la sentencia tiene la función de declarar la verdad jurídica que es cuestionada en la controversia judicial y al establecer esta verdad jurídica, el juez no está creando una nueva situación jurídica o legal, sino simplemente reconociendo la que existió en los términos que el actor sostuvo en su libelo.

Vigésimo cuarto: Que así entonces, no habiéndose regido la vinculación que hubo entre las partes conforme a las normas legales y estatutarias que reclama el recurrente, éstas resultan inaplicables, por lo que bien hizo la juez condenando a la demandada al pago de las cotizaciones de salud conforme al estatuto que rigió dicha vinculación laboral, razón por la cual por esta causal el recurso deberá ser necesariamente rechazado, al no vislumbrarse las infracciones de ley en que se afinca el recurso.

Vigésimo quinto: Que, a mayor abundamiento, es un criterio asentado de la Excma. Corte Suprema que “en cuanto a lo pretendido por el actor por concepto de nulidad del despido, considerando que el fallo sólo constató una situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del



empleador, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral.

No obstante lo expuesto, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

En otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

Por lo razonado, no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Lo anterior no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral.” (sentencia de reemplazo en causa rol 4409-2019)

La sentencia dictada en este procedimiento se pronuncia en tal sentido, resultando acorde con los criterios que la alta magistratura ha dejado por sentado.



Vigésimo sexto: Que, en cuanto a las denuncias a infracciones realizadas en el desarrollo de las otras causales serán desoídas por no ser pertinente su desarrollo en cada una de las causales donde se indicaron y el carácter estricto del recurso que impide a esta Corte subsanar defectos procesales que cometan las partes.

Y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 455, 477, 478 y 479 del Código del Trabajo, se declara:

Que **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad interpuestos por los abogados don Francisco Riquelme Merino, en representación de la demandante y don Óscar Exss Krugmann, en representación de la demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en este procedimiento el 2 de enero de 2019, la que en consecuencia no es nula.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Marcelo Neculmán Muñoz.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° Laboral - Cobranza-26-2019 (pvb).



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra. María Georgina Gutierrez Aravena, Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia y abogado integrante Sr. Marcelo Neculmán Muñoz. No firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena, por encontrarse ausente.

En Temuco, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

